

La crisis argentina : riesgos y lecciones de una experiencia

Rosario Green

El presente ensayo busca coadyuvar a la comprensión de la actual crisis argentina en toda su magnitud, en la gran complejidad de sus aspectos económicos, políticos y sociales. Su finalidad ulterior es superar la mera descripción coyuntural de este momento de gran fragilidad en Argentina, obtener algunas lecciones de y llamar la atención sobre dos clases de riesgos principales que esta situación plantea: los de carácter interno y los de naturaleza internacional.

Por lo que se refiere a los riesgos internos, resalta el hecho de que la impaciencia de la sociedad civil frente al Estado la ha llevado, por una parte, a conquistar la calle para protestar, contribuyendo así a la caída de dos gobiernos constitucionales en el breve lapso de unos días a finales de 2001 y, por la otra, a buscar, -en un intento casi heroico pero no por ello menos escabroso-, organizarse para complementar y, en numerosos casos, incluso sustituir la obligación gubernamental de poner en marcha políticas públicas que le garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas. Se han establecido clínicas y comedores para niños e indigentes con apoyo de los propios habitantes de los barrios más pobres, y recreado figuras como el trueque: hoy existen, por ejemplo, 5 000 establecimientos o "ferias" donde éste se practica y en los que participan más de un millón de familias que de otra manera no podrían sobrevivir. En suma, si bien es cierto que ante la crisis se ha dado un gran avance de la sociedad civil, lo cual es en sí mismo un hecho positivo, no es menos verdadero que cuando éste se da a costa de una ampliación del sector informal de la economía o vulnerando las instituciones democráticas, corre el riesgo no sólo de revertirse en contra de la población sino de utilizarse como excusa para justificar olvidos y excesos. El resultado es que esa movilización, en lugar de constituir un salto hacia delante, puede convertirse en uno hacia atrás.

Por lo que se refiere a los riesgos internacionales, se desea poner de manifiesto la posibilidad de que las actuales dificultades de la sociedad argentina impacten a otros países y de que estos "contagios" sobrepasen, sin soslayarla del todo, la esfera de los considerados como viejos o "tradicionales", principalmente los de carácter financiero que el mundo bautizó con nombres como el "efecto tequila", para mencionar tan sólo uno de ellos, proyectándose a otros ámbitos como el político y el social, con consecuencias que, por desconocidas, pudieran resultar altamente peligrosas. Los lamentables acontecimientos que recientemente se presentaron en Venezuela podrían ser una clara llamada de atención a la comunidad internacional, justamente en el sentido que se desea resaltar en estas páginas: el riesgo de que la irritación de algunos sectores contra determinadas acciones gubernamentales lleve, en el extremo, a reivindicar el cuartelazo, cuando la constitucionalidad debería plantearse como la única forma de sobrevivencia democrática posible. O dicho de otra manera, el riesgo de que una crisis de gobierno se convierta en una crisis del régimen democrático en un continente que, como el latinoamericano, batalló tanto para establecer la democracia como el único modelo aceptable.

Un pasado de bonanza

Como la gran mayoría de las naciones de América Latina, Argentina logró su independencia de España a principios del siglo XIX. Como muchas de ellas también, la nación habría de pasar las primeras décadas de esa centuria enfrascada en una cruenta guerra civil. Sin embargo, la Constitución de 1853 pondría fin al conflicto y organizaría e institucionalizaría al país. Argentina inició entonces su expansión económica, apoyada en la exportación de cereales y carne a gran escala, cuantiosas inversiones británicas en infraestructura y servicios, y una muy intensa relación comercial con el Reino Unido.

La prosperidad argentina por esos años fue de tal magnitud que el país creció, incluso, a un ritmo mayor que el de Estados Unidos. Para 1910, Argentina era ya la décima economía del mundo; la séptima potencia exportadora, con 7% del comercio mundial; y su PIB representaba 50% del de América Latina.

Además, habiendo establecido la educación obligatoria, universal y laica desde 1885, al cumplirse el primer centenario de su independencia, Argentina contaba ya con un porcentaje de población que sabía leer y escribir, superior al que en esos momentos privaba en la mayoría de los países europeos. Así, el buen desempeño económico argentino tendría una contrapartida igualmente aceptable en lo social, pues además de educarse, la gente se alimentaba y esto, a su vez, incidía en mejores niveles de salud para la población.

En lo político, la situación no iba a la zaga. Se había introducido el voto universal, secreto y obligatorio y las formas democráticas se respetaban. Durante tres lustros (1916-30) el Partido Radical, representante a ultranza de la clase media y sus valores, gobernó al país e incidió en la ampliación de estos sectores medios a todo lo largo y ancho de la nación.

Si bien para 1930 el crecimiento argentino era menos veloz, su esquema exportador y su vinculación comercial con Inglaterra seguían rindiendo frutos. Aunque pasó a representar 35% del PIB latinoamericano conforme otros países de la región hacían su aparición, y 4% del comercio mundial a medida que se incorporaron nuevos competidores al escenario internacional, Argentina continuó siendo una economía que crecía, exportaba, acumulaba riqueza y fortalecía a su clase media a la que educaba y curaba, dándose el lujo no sólo de alimentarla sino de sostener igualmente al mundo hambriento por los años de la gran depresión, primero, y de la segunda guerra mundial, después. No en balde en la década de los 40 el Premio Nobel, Collin Clark, decía que al ritmo que el país llevaba, en veinte años contaría con un PIB cuyo volumen lo ubicaría entre los cinco más abultados del mundo.

A su autosuficiencia alimentaria, Argentina habría de añadir luego su autosuficiencia energética así como su enorme reserva acuífera, colocándose en situación de dar el salto cualitativo que la hubiera sacado del tercer mundo y proyectado al primero. Sin embargo esto no sucedió y la pregunta obligada es ¿qué lo impidió? Otras naciones que atravesaron por historias similares como Canadá, Australia y Nueva Zelanda lo lograron, ¿por qué Argentina no?

Numerosos autores han buscado resolver esas interrogantes y en sus diversas interpretaciones existe, sin duda, la clave o las claves para entender la evolución argentina. Recuérdese, por ejemplo, que cuando hace más de setenta años el filósofo español José Ortega y Gasset visitaba Argentina, si bien se maravillaba con el gran nivel cultural e intelectual de sus habitantes y su gran capacidad para debatir, argumentar, discutir y hasta escribir, les reprochaba su incapacidad para actuar, para hacer, mediante aquella frase hoy considerada como profética: "argentinos, a las cosas". Igualmente severa puede ser la descripción del físico alemán, Albert Einstein quien se preguntaba, luego de recorrer Argentina por la misma época "¿cómo un país tan desorganizado podía ser tan exitoso?"

Un presente en crisis

Más que rebatir esas frases o añadir al largo listado de argumentos que tratan de explicar las razones del peculiar rezago argentino, lo que se busca en este apartado es el señalamiento de algunos aspectos mucho más contemporáneos y menos filosóficos: poner de manifiesto la profundidad de la actual crisis y señalar el papel que en ella asumen los protagonistas, nacionales e internacionales.

Algunas manifestaciones de la severidad de la actual crisis argentina

Hoy es casi un lugar común señalar que Argentina se encuentra en medio de una de las más severas crisis que haya conocido en su historia. Una crisis prácticamente total porque abarca casi todas las esferas de la vida del país.

Es una crisis económica que en buena parte se origina por la aplicación de políticas monetarias y financieras inadecuadas. Se trata de una crisis que mucho tiene que ver con el mantenimiento a ultranza, durante más de diez años, de un régimen cambiario que acabó siendo absolutamente irreal, pese a que en sus orígenes la paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense ("convertibilidad") fue la única medida capaz de poner fin a la hiperinflación que en 1989, por ejemplo, fue de cerca de 5 000% y en 1990, aunque menor, alcanzó un nivel de 1 300%. Se trata, igualmente, de una crisis que acabó con el país de 8 950 dólares anuales de ingreso per cápita (hoy de sólo 2 748 dólares), la deflación de precios y

salarios, y la ilusión de la certidumbre. De una crisis que puso de manifiesto la incapacidad del sistema financiero para reformarse y saber cuándo desprenderse de un régimen que, como el de la "convertibilidad", fue concebido para resolver una situación de emergencia que debió haber sido transitoria. Una crisis, en suma, que transparentó la falta de disciplina fiscal indispensable para compensar la autonomía monetaria que se perdió el 1 de abril de 1991, al adoptarse la caja de conversión en la que se apoyó el tipo de cambio fijo y que hubiera evitado lo que, sucedió: la acumulación de un déficit público enorme, resultado de un gasto excesivo y una renta fiscal exigua.

Recuérdese que con la "convertibilidad", Argentina había renunciado a todo activismo monetario, lo cual no se dio sin consecuencias: en una economía mundial donde la regla era la flotación, un tipo de cambio fijo irrevocable, prácticamente imposibilitaba todo ajuste frente a los desequilibrios internos y externos. Además, el gobierno había reducido al mínimo la intervención del Estado en la economía mediante la privatización de los servicios públicos; decisión que llevó a que en menos de cinco años el Estado se desprendiera de casi todos sus activos productivos en sectores como la siderurgia, la petroquímica y la energía. Por otro lado, si bien el país se había abierto igualmente al libre comercio y al capital privado extranjero, cosechando importantes beneficios de un ambicioso programa de integración con sus vecinos en el Mercosur, pronto comenzó a enfrentar los obstáculos típicos de una agenda más compleja de armonización y adopción de políticas comunes.

Empeñado en el mantenimiento de un tipo de cambio fijo y dadas sus implicaciones, el gobierno argentino debió endeudarse cada vez más y a costos siempre más altos. Por otro lado, mientras el valor del dólar se incrementaba por la posición mundial de la economía estadounidense, el del peso lo hacía también pero de manera artificial, destruyendo con ello la competitividad de los productos argentinos de exportación y agravando, aún más, la recesión económica en Argentina. Las dificultades para obtener nuevos créditos externos a fin de compensar el déficit de la balanza comercial se hicieron cada vez más evidentes, dado lo abultado de su deuda externa que para finales del año 2000 alcanzaba ya los 145 mil millones de dólares; la más voluminosa de todas las naciones emergentes. Los acreedores se negaban a continuar prestándole al país o, si lo hacían, demandaban tasas de interés extraordinariamente altas.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) parecían haberse olvidado de su tradicional aliado y cuando, un año después, a principios de diciembre de 2001, el Fondo anunció la suspensión de nuevos créditos para Argentina, declarando el 18 de ese mes su falta de confianza en la administración del entonces presidente Fernando De la Rúa, el destino del país pareció definirse: agobiado por problemas internos y carente de apoyo internacional, dos días después caería ese gobierno (radical). Le sucedería de inmediato otro (justicialista) que, en sus escasos siete días de duración, decretaría la suspensión del pago de la deuda externa.

Mientras el mundo veía con preocupación el anuncio del default, la confusión pareció instalarse en el país donde un Congreso nacional aplaudía la medida que tan graves consecuencias habría de traer a Argentina en los siguientes meses. Un nuevo gobierno debió asumir el poder a partir del primero de enero de 2002 (también justicialista), y se vería obligado así a convivir con decisiones tomadas por las anteriores administraciones. Con las de Fernando De la Rúa: principalmente las restricciones impuestas sobre los haberes monetarios de quienes los tenían depositados en los bancos, el famoso "corralito". Con las de Adolfo Rodríguez Saá: especialmente su decretada suspensión del pago de la deuda externa del país. Así como con las que determinó el nuevo gobierno, liderado ahora por Eduardo Duhalde: una devaluación después de más de 10 años de paridad uno a uno y controles de cambio que buscaron evitar, sin conseguirlo, la cuantiosa fuga de capitales estimada en 20 mil millones de dólares a finales de 2001, sumados a los más de 100 mil millones que, se calcula, tienen depositados los argentinos en el exterior.

A las dificultades económicas anteriores debe añadirse el incontrovertible hecho de que fue imposible concretar acuerdos fundamentales con los principales actores políticos del país para encontrar una solución negociada, tanto a la salida de la "convertibilidad" como al problema fiscal. Se desencadenó entonces una crisis política que hizo más evidente aún la registrada en la esfera económica, y que se

proyectaría de manera muy cruenta sobre los indicadores sociales.

La protesta popular no se hizo esperar. Surgieron múltiples y variadas formas en las que el descontento y la irritación del pueblo argentino se manifestaron: "cacerolazos" (más de 2 000 desde que se iniciaron, el 19 de diciembre de 2001, y que reúnen a multitudes en las calles golpeando cacerolas en señal de protesta frente a una política económica que castiga por igual a las clases medias que a las inferiores); "piquetazos" (desocupados carentes de expectativas en una sociedad donde el desempleo es de cerca de una cuarta parte de la fuerza laboral); cortes de ruta para impedir el acceso a las principales ciudades del país; "escraches" (agresiones contra políticos considerados responsables de la crisis, y hasta contra sus familiares); y tomas e incluso destrucción de edificios públicos y privados, como el Congreso o los bancos y los supermercados (estos últimos para apropiarse de alimentos y otros bienes).

Muy pronto la imagen que Argentina proyectó al mundo, a través de los medios de comunicación escritos y electrónicos, fue la de una sociedad caótica, al borde de la anarquía, y no merecedora del apoyo proveniente ni de la Casa Blanca ni del Fondo Monetario Internacional. Tanto así que el secretario estadounidense del Tesoro llegó a declarar que en los últimos setenta años Argentina había entrado y salido de numerosas situaciones críticas "porque los argentinos son así". Tal aseveración tuvo como consecuencia una mayor descapitalización del país y una aceleración de la pérdida de confianza en la nación por parte del resto de la comunidad internacional. Igualmente evidenció lo que ya se anotaba antes, el desinterés del Fondo por la suerte de uno de los mejores intérpretes de sus políticas, y la indiferencia del gobierno de Estados Unidos frente al destino de uno de sus más importantes aliados tradicionales.

No en balde se afirma que pese a la ortodoxa adopción en la última década del siglo pasado del denominado "Consenso de Washington", que implantó un modelo para armar una Argentina al gusto tanto del FMI como de Wall Street, lo que predomina en la actualidad es el olvido de estos importantes actores y la impresión de que ni las instituciones financieras con sede en Washington y en Nueva York, ni el gobierno estadounidense, son aliados confiables cuando se registra una crisis de la envergadura de la Argentina que, sin embargo, se desestima por considerarla "contenida", bien porque de ella no se espera un "contagio serio", o porque no plantea una amenaza percibida como "peligrosa" en términos estratégicos. De ahí que no pueda evadirse tampoco la pregunta acerca de si vale la pena descartar los "textos de la sabiduría fondiana" y caminar por cuenta propia, como lo hicieron antes, de manera poco ortodoxa pero efectiva, dada la rapidez de su recuperación, Malasia y Hong Kong (el primero instaló severísimos controles de capital en la mitad de su profunda crisis y el segundo nacionalizó buena parte de su mercado accionario). Es claro que la respuesta a esa interrogante supera los alcances de lo que este inciso buscó simplemente dejar anotado.

Los protagonistas de la crisis

A la luz de lo anterior hoy se desarrolla en el país un importante debate: ¿se está creando con el "caso argentino" un antecedente de la manera en como se podrían comportar en el futuro importantes países desarrollados y sus instituciones? ¿Puede Argentina salir de su crisis sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional? ¿Funcionan siempre bien y en todos los casos las recomendaciones que propone la institución sobre el libre mercado, la liberalización comercial y la apertura de las políticas de inversión en los países emergentes? ¿No incurrió el Fondo en corresponsabilidad en la actual crisis argentina al imponerle, a cambio de nuevos préstamos, un severo régimen de recortes al gasto e incrementos a los impuestos, en momentos en que el país se encontraba frente a una recesión rampante? ¿Por qué no hizo sonar la voz de alarma cuando era evidente, y los propios funcionarios del FMI así lo señalaban, que Argentina tendría que devaluar, en lugar de pasar directamente a la fase de exigirle al país la adopción de medidas draconianas, aun si era claro que éste no contaba con las redes sociales que pudieran amortiguar el grave daño sobre su población? ¿Hasta dónde es factible que llegue la indiferencia que Washington parece mostrar frente a una Argentina que goza de un estatuto especial en el ámbito de la OTAN? ¿Qué actitud y qué medidas caben esperar del pueblo y del gobierno argentinos ante la actual fragilidad institucional del país? ¿Hasta dónde puede arriesgarse día a día la gobernabilidad de Argentina? Es

obvio que un debate que tenga por centro a la actual crisis del país debe empezar por la aceptación de la responsabilidad que los diferentes actores, nacionales e internacionales, han tenido tanto en su gestación como en su proyección a todas las esferas de la sociedad.

Por un lado, habría que tratar de dilucidar lo que el gobierno estadounidense y los organismos financieros internacionales tienen en mente con el abandono de Argentina. Responder a esto con el argumento de la necesidad de escarmentar al país por haber declarado una moratoria unilateral sobre su deuda externa, parecería exagerado. Otros países que han incumplido la ortodoxia financiera han conseguido, sin embargo, rescates y blindajes. Aparece entonces con toda su fuerza el antiquísimo tema de lo estratégico. Igual que antes la guerra contra el comunismo adicionaba puntos a la importancia de aquellos países en los cuales se temía que esa ideología pudiera tener un caldo de cultivo favorable, hoy la batalla contra el terrorismo internacional encuentra en países musulmanes y situados geográficamente en puntos clave, como Turquía, el escenario ideal para manifestar lo que debe entenderse por solidaridad internacional en estos tiempos. Para tales naciones parecería haber recursos y paciencia, pese a sus patentes desequilibrios fiscales y monetarios y sus dificultades para regirse por la doctrina que los organismos financieros internacionales y Washington ponderan como la única, o al menos la mejor, para sortear los actuales problemas en Argentina.

Por otro lado, la posición del gobierno argentino en estos momentos tampoco ayuda, e incluso se ha interpretado como una de aceptación de los actuales estándares: si no se es estratégicamente vital, se debe al menos ser disciplinado. Los gobernantes argentinos parecen estar convencidos de que es necesario cumplir con las exigencias del FMI, pese a que algunas de ellas demanden compromisos de difícil negociación política; lo importante es que se consolide la promesa de recursos financieros. Sobre su volumen se tienen serias dudas de si será suficiente para resolver las enormes carencias de la economía argentina. Se sabe igualmente que se trata más bien de una operación virtual, de un mero asiento contable, ya que en la medida en que gran parte de estos recursos servirá para pagar adeudos con organismos financieros internacionales, no puede hablarse propiamente de "dinero fresco". Sin embargo, se tiene la esperanza de que el acuerdo enviará una señal favorable a la comunidad internacional, devolverá confianza y, tal vez, abrirá la posibilidad de nuevas inversiones, nacionales y extranjeras, tanto directas como en cartera.

Empero, esa postura a favor de un acuerdo a toda costa, no se ha dado al margen de importantes obstáculos, particularmente por la posición del Congreso. Como nunca sucedió desde 1983, año en que se restablece la democracia en el país, el gobierno nacional a menudo ha encontrado resistencia entre diputados y senadores, incluidos los de su propio partido, para conseguir los votos que necesita y sacar adelante sus iniciativas fundamentales. Los legisladores argumentan que siendo Eduardo Duhalde un presidente de origen parlamentario, sin refrendo del voto popular y elegido para administrar un contexto caracterizado por la indignación social, la retracción de los políticos y la ofensiva de los intereses sectoriales del poder económico que buscan mayores espacios en la nueva realidad, la gobernabilidad del Ejecutivo depende de que trabaje al lado del Legislativo que le dio nacimiento. De ahí que cumplir con el Fondo, como pretende la administración duhaldista, obligue necesariamente a un complicado y constante cabildeo con el Congreso. A las presiones de este último, debe añadirse la postura de un importante número de gobernadores provinciales que cada vez más buscan desempeñar un papel protagónico en el ámbito de las decisiones nacionales.

Mientras tanto, el pueblo argentino continúa manifestándose en las calles de la capital y de las principales ciudades del país, y no faltan los analistas que señalan que Argentina tiene salida con o sin el apoyo del FMI, pero que lo que en realidad le hace falta a Argentina es diseñar el verdadero "plan B". Es decir, el conjunto de medidas económicas, políticas y sociales que combatan y erradiquen los males que aquejan a la sociedad argentina. Que restablezcan el crecimiento económico: el año pasado la caída del PIB fue de 7% y se calcula en 15% la que habrá de registrarse este año. Que acaben con la pobreza: 16 de los 36 millones de habitantes son pobres y casi cinco millones de esos ellos son considerados indigentes. Que eliminen el desempleo: 25% de la fuerza laboral del país no tiene trabajo, lo cual

sumado al subempleo puede alcanzar 45% de la misma. Que remedien la enfermedad: el gobierno ha decretado una situación de emergencia sanitaria hasta fin de 2002; faltan medicamentos y materiales en clínicas y hospitales. Que combatan la desnutrición: como en el caso anterior, el gobierno ha instaurado una emergencia alimentaria por el resto del año; el colmo en un país productor de alimentos que los encarece para especular con sus precios. Que le devuelvan a la educación el importante papel que desempeñó en el pasado: existen cifras que indican que este año se registró un 30% menos de inscripciones en las escuelas públicas de todo el país a causa de la crisis. Que incentiven la productividad: la producción ha caído en 10% con el consecuente cierre de numerosos establecimientos y 170 mil despidos en los últimos meses. Que erradiquen la inseguridad jurídica como la que atenta contra las personas: muchas empresas encuentran difícil mantener sus inversiones dado lo confuso del actual marco jurídico, y el aumento de los índices de criminalidad se ha convertido en una de las más serias amenazas a la vida cotidiana. Que restituyan la credibilidad en los políticos y en el quehacer público: el eslogan que plantea "que se vayan todos" habla por sí solo de la desilusión y el fastidio de los ciudadanos frente al Estado. En suma, que hagan de Argentina un país con crecimiento económico y desarrollo social y la inserten con beneficio en un entorno internacional altamente competitivo, disminuyendo su extrema dependencia de la exportación de productos primarios.

Si algo puede desprenderse de los párrafos anteriores es la necesidad de reconocer el carácter eminentemente interno de la crisis argentina y la urgencia de lograr un pacto político que haga viable la conclusión del actual mandato presidencial sin más sobresaltos, garantice la celebración de elecciones democráticas en su momento y restituya la estabilidad que, en todos los órdenes, precisa el país.

Esta apreciación no debería, sin embargo, soslayar la urgencia de que se valore adecuadamente el componente internacional de la crisis que hoy vive la nación, mismo que se expresa en la "orfandad" en la que el resto del mundo parece haber dejado a Argentina, a fin de que se le garantice a esta nación el respaldo solidario sin el cual difícilmente podrá volver a gestarse la confianza comunitaria que necesita. No puede ocultarse el temor de que el colapso de la economía argentina, la tercera en importancia de América Latina, podría hacer que la región, orientada en general hacia la democracia y el *laissez faire*, reaccionara ante esa "orfandad", ante ese olvido, ante ese abandono, retornando al viejo modelo político y económico en el que el Estado lo era todo, y adoptara prácticas populistas que ahí donde en los últimos tiempos se han aplicado, sólo han agudizado contrastes y tensiones.

Viejos y nuevos "contagios"

Se señalaba en la introducción de este ensayo que, además de intentar obtener algunas lecciones de la crisis argentina para la propia Argentina, se trataría de entrar en el tema de los "contagios" de esta realidad social sobre su entorno internacional, en tanto que un riesgo muy real.

Aunque no puede negarse el peso de las consecuencias económicas de la actual crisis, particularmente sobre los argentinos y sobre las empresas extranjeras establecidas en el país, la verdad es que el impacto regional y aun subregional no ha sido de la magnitud que llevaría a la comunidad internacional, como sucedió a finales del pasado decenio con las experiencias asiáticas, a preocuparse por la profundidad de un posible "contagio" de carácter financiero. Sin embargo, no pueden soslayarse el hecho de que ya empiezan a registrarse algunas las repercusiones nocivas de la problemática argentina sobre algunos de sus vecinos, particularmente sobre sus socios en el Mercosur.

En Paraguay, por ejemplo, tan sólo en los tres primeros meses de 2002, el consumo de productos locales como la leche en polvo y los quesos de origen paraguayo, cayó más de 20%, debido a la entrada ilegal de similares argentinos. Además, los problemas enfrentados por los ciudadanos paraguayos que laboran en Argentina para enviar sus remesas a Paraguay, en virtud de la dificultad para conseguir dólares y hacerlos llegar por la vía bancaria, han repercutido también negativamente sobre a la economía de ese país, como lo ha hecho la modificación de su tipo de cambio a consecuencia de la devaluación del peso argentino.

Por otro lado, en Uruguay los analistas estiman que la crisis de su vecino rioplatense es una de las principales razones por las que el PIB cayó 7% durante el primer trimestre del año. Preocupan, en particular, las corridas bancarias de capitales argentinos depositados en ese país que buscan plazas más seguras fuera del Cono Sur.

En el caso de Brasil, la economía más fuerte de las cuatro fundadoras del esquema subregional del Mercosur, el desplome de la economía argentina y el temor de una profundización de la crisis de gobernabilidad por la que atraviesa Argentina, han elevado el riesgo-país, que es la medida de la confianza de los inversionistas, en un 0.55%, afectando sensiblemente la cotización de los títulos de deuda brasileña. Pero, además, el hundimiento del peso argentino ha provocado que un buen número de las empresas del país no puedan cumplir con sus compromisos financieros con Brasil: un total de 18 grandes empresas argentinas ha dejado de pagar 541 millones de dólares, es decir, 16% de las deudas corporativas que a finales del 2002 podrían sumar cerca de 6 mil millones de dólares.

Pero además de estos "males menores", si se les compara con las repercusiones de las crisis financieras de 1997 y 1998 en los países del sudeste asiático y en Rusia, no puede en modo alguno descartarse el surgimiento de un nuevo tipo de riesgo o amenaza: el "contagio" político y social que pudiera darse a partir de la gran atención que los medios internacionales han dedicado a fenómenos como el "cacerolazo" y otros descritos en estas páginas, así como a la estrecha correlación que se ha querido establecer entre estas manifestaciones populares de descontento y la caída de dos gobiernos constitucionales en la Argentina de las postrimerías del año pasado.

Es un hecho que la fragilidad de las instituciones políticas latinoamericanas, resultado en muchos casos de la reciente instauración de regímenes democráticos, las coloca en situaciones de alta vulnerabilidad. Con frecuencia, ciudadanos de estos países muestran su fatiga y hasta irritabilidad por la lentitud con la que se adoptan ciertas políticas públicas y dan resultados. La exigencia de la inmediatez a menudo orilla al desbordamiento social. Se plantean las demandas y se esperan soluciones en forma casi simultánea, cuando generalmente los procesos democráticos imponen consultas, negociaciones y acuerdos que en ocasiones toman mucho tiempo, causando desesperación y malestar.

La experiencia argentina de los últimos meses es, a no dudar, un claro ejemplo de lo anterior. Independientemente de los errores y omisiones en los que los recientes gobiernos pudieran haber incurrido, lo que ha predominado es la impaciencia de la gente. Esto ha propiciado un ambiente en el que conviven la protesta ciudadana y un conjunto de intereses que no son siempre del todo legítimos porque no representan el auténtico sentir popular. Una situación de este tipo provocó recientemente en Venezuela un golpe de Estado espurio y, por fortuna, extraordinariamente perentorio que, sin embargo, debe interpretarse como una primera llamada.

¿Puede leerse algo más en ese drama venezolano? La caída, en sus respectivos momentos, de De la Rúa y de Rodríguez Saá ¿inspiró el efímero derrocamiento del presidente Chávez? ¿Puede inferirse que los "cacerolazos", "piquetes" y "escraches", que cotidianamente protagonizan los argentinos, "contagiaron" a los venezolanos? Si es posible concluir "contagio" en este caso ¿puede esperarse que se repita ahí o en otra nación de estas latitudes? La caída, en sus respectivos momentos, de De la Rúa y de Rodríguez Saá ¿inspiró el efímero derrocamiento del presidente Chávez? Dificilmente pueden imaginarse respuestas claras o definitivas a estas preguntas pues a todas luces falta evidencia empírica. Sin embargo, se ha querido adelantar esta hipótesis del "contagio" político por considerar que, aun si no se puede ir más allá de su mero planteamiento, esto no invalida el ejercicio intelectual que con ello se pretende.

Un futuro incierto: a manera de conclusiones

Probablemente el más candente de los temas en Argentina hoy es el carácter eminentemente político de su crisis, encapsulada en la que podría denominarse "la disputa por el poder". A la luz de esta premisa resalta la naturaleza casi esquizofrénica que parece marcar el tiempo político argentino: mientras por un lado se mantiene el marco democrático formal, por el otro, se da una lucha sorda, tanto entre los diversos

componentes del Estado como entre los distintos niveles de gobierno y hasta en el interior de los propios partidos políticos. Una lucha que a menudo no sólo amenaza con el rompimiento del sistema, sino que debilita al máximo las instituciones causando graves daños a la gobernabilidad en el país.

Actualmente existe en la Argentina presidencialista, un poder Ejecutivo acotado por un Legislativo que insiste en el cogobierno por el simple hecho de haberle dado nacimiento en estricto apego constitucional. La aceptación de esta "paternidad" que el Congreso reclama del gobierno nacional, complica la puesta en marcha de medidas que resuelvan o atenúen al menos la crisis, porque todo debe ser sopesado, negociado, "amarrado", más allá de lo que, en principio, establecen las reglas de la convivencia entre poderes.

El Judicial, por su parte, también se hace presente y reclama su cuota. generándose así la impresión de que en esta disputa sucede en la cúpula, al margen de la ciudadanía. A esos desencuentros entre los tres poderes deben añadirse los que se dan entre el gobierno nacional y los de las 24 entidades que integran la República, los cuales se centran fundamentalmente en la Ley de Coparticipación que es la que reglamenta la distribución de los recursos. El resultado es esta especie de puja generalizada a la que se ha hecho referencia y, frente a la cual, la población reacciona con profunda irritación; sintiéndose ignorada, busca nuevas formas de participación política y directa, recurriendo incluso a sistemas de representación comunitaria bajo la forma de "asambleas de barrio".

Tal vez la radiografía financiera de la Argentina de estos momentos permita entender mejor la magnitud de esta "disputa por la nación", porque es justamente en este ámbito donde se da la concurrencia de los tres poderes del Estado y de los dos niveles de gobierno. Este es, igualmente, el escenario donde con mayor claridad se percibe que la principal víctima es la ciudadanía que debe absorber las consecuencias de este intrincado juego de poder.

Debe recordarse que a principios de 2001 los bancos tenían depósitos por 86 570 millones de pesos (o de dólares pues la paridad era uno a uno). Al concluir ese año, habían abandonado las arcas de los bancos cerca de 20 000 millones de dólares. Con la devaluación y la pesificación a 1.40 pesos por dólar, el nuevo saldo en bancos pasó a 85 000 millones de pesos. Sin embargo, durante los primeros cien días del año en curso se retiraron casi 10 000 millones de pesos, de los cuales 2 500 millones fueron cubiertos por recursos de amparo (a este drenaje se le ha llamado "goteo") y el resto salió con la flexibilización del denominado "corralito", a través de la liberación de la cuenta de sueldos, la pesificación de una parte de los plazos fijos antes de su reprogramación (escalonamientos a plazos más largos), y las transferencias de plazos fijos para financiar la compra de casas y de autos nuevos. Se estima que los recursos obtenidos mediante amparo se cambiaron a dólares o a pesos al tipo del cambio libre (superior al 1.40 oficial), y que al menos 5 000 millones de pesos de los recursos obtenidos mediante la flexibilización engrosaron el circulante en poder del público. Así, se calcula que actualmente las monedas y billetes en los bolsillos de la gente superan en un 50% las necesidades de pagos y transacciones habituales, reflejando la desconfianza y el temor de la población frente a la presente incertidumbre. Si a esta cifra se le añaden los casi 5 000 millones de pesos que circulan en forma de bonos provinciales ("patacones", "lecop", etc.), se tiene una idea del riesgo que hoy corre Argentina de regresar a los tiempos de la inflación galopante.

De los 75 000 millones de pesos que habrían quedado en el sistema bancario, se tienen 45 000 millones en plazos fijos reprogramables y 30 000 millones en depósitos a la vista. Era la intención del gobierno transformar a los primeros en bonos públicos mediante el fallido Plan Bonex. Sin embargo, su rechazo por el Congreso llevó, el 23 de abril, a la renuncia del gabinete económico del presidente Duhalde, colocándolo en una muy delicada situación política. Vale la pena señalar que de haberse puesto en práctica esa medida, no del todo descartada por el momento, en el sistema bancario hubieran quedado sólo los depósitos a la vista que, al tipo de cambio promedio, no representan más de 10 000 millones de dólares. Esto hubiera arrojado un resultado insólito: sólo 12% (10 000 millones de dólares) de lo que había en bancos a principios de 2001 (86 570 millones de dólares) estaría disponible y a la vista quince meses después. Ese es el tamaño de la pérdida financiera en Argentina.

A esa radiografía corresponde la no menos preocupante placa política a la que se hacía referencia en párrafos anteriores. El drenaje que causó la flexibilización del "corralito" llevó al Ejecutivo a plantearle al Judicial que frenara el "goteo" atribuible a los amparos ganados por los cuentahabientes indignados por el "decomiso" que de sus ahorros hacían banqueros y gobierno. Sin embargo, como al mismo tiempo una comisión legislativa estudiaba una demanda de juicio político contra los nueve jueces de la Corte Suprema de la Nación, algunos analistas señalan que el Alto Tribunal dejó saber que no ayudaría a detener ese drenaje a menos que el Ejecutivo le garantizara la improcedencia de tal juicio, y los jueces pudieran retirarse de sus cargos con tranquilidad. La difícil relación política entre el Legislativo y el Ejecutivo por la cuestión de la "paternidad" a la que ya se hizo referencia, acabó por precipitar una vez más una crisis de tal gravedad que casi concluye como las dos anteriores: con la renuncia del presidente. Después de una ardua negociación, el Congreso acabó adoptando una ley ("ley tapón") que busca detener la fuga de depósitos del sistema financiero, señalando que sólo la Cámara Federal de Apelaciones podrá ordenar la devolución de los recursos atrapados en el "corralito"; es decir, no basta con obtener un amparo, es necesario ganar el juicio.

Paradójicamente, la vastedad de la crisis no sólo permitió la adopción de la aún cuestionada y tildada de inconstitucional "ley tapón", sino que facilitó el difícil acuerdo entre los dos niveles de gobierno. Mediante la firma de un Pacto de Gobernabilidad, el gobierno federal y 16 gobernadores provinciales, en su mayoría justicialistas, se comprometieron a cumplir con catorce puntos que cubren prácticamente todas las demandas del FMI: respetar los acuerdos internacionales y reafirmar la vocación argentina de integración al mundo; suscribir con cada una de las provincias los acuerdos fiscales necesarios para reducir sus déficit en un 60%; elevar al Congreso una nueva Ley de Coparticipación; propiciar una disciplina fiscal y monetaria que contenga los precios y el tipo de cambio; garantizar a los ahorristas el acceso a sus fondos; restablecer el sistema financiero; instrumentar un nuevo acuerdo de responsabilidad fiscal; promover una reforma impositiva integral que estimule la inversión de capital; sancionar la Ley de Quiebras (cuyas reformas aspiran a otorgarle estándares internacionalmente aceptados); derogar la Ley de Subversión Económica (que data de la dictadura y de la que se dice que su especificidad no corresponde a la laxitud de su marco penal); propiciar la repatriación de capitales argentinos; alentar las inversiones orientadas a la exportación de manufacturas o a la sustitución de importaciones; garantizar la reforma política a través de una reducción de los costos de la política; y avanzar en los planes de empleo, principalmente en el sector productivo.

El anuncio de las nuevas medidas, en particular los arreglos con el poder Judicial y con el Legislativo, no se dio sin consecuencias. La protesta callejera, en especial en el interior del país, se intensificó y los analistas volvieron a plantear sus dudas en diversos medios. El desafío quedó sellado: si para finales de julio no cede la crisis y no hay acuerdo con el FMI, podría convocarse a elecciones nacionales 60 días después (el 29 de septiembre de 2002); es decir, mucho antes de lo previsto por el nuevo gobierno: 14 de septiembre de 2003.

Ese es el momento clave en el que se encuentra la Argentina hoy. Su inestabilidad es sin duda indicativa del frágil equilibrio político interno, pero muestra también la corresponsabilidad que en esta crisis tienen los actores internacionales y, principalmente el FMI, que tendría que hacer su propio *aggiornamento* a fin de estar en condiciones de responder adecuadamente a los retos del siglo XXI que distan mucho de aquellos que existían en 1944, cuando nació. Debe admitirse que al no tener el gobierno argentino, pese a haberla decretado desde el momento mismo en que asumió el poder, una clara estrategia posdevaluación, se vio obligado a ir haciendo y deshaciendo camino a medida que el Fondo le fue planteando diversas condiciones.

Pero tal improvisación no puede encubrir la "politizada" actitud de la institución cuando, momentos después del golpe de Estado contra el presidente Chávez, le ofreció a Venezuela la asistencia para satisfacer sus "necesidades inmediatas" que, en cambio, la habría negado a Argentina. Es cierto, debe exigirse transparencia, coherencia y rendición de cuentas de parte de las instituciones nacionales; así

quedó recientemente plasmado en el Consenso de Monterrey. Pero es igualmente urgente que las instituciones internacionales den ejemplo de lo mismo y algo más: comprensión de los nuevos desafíos y atención solidaria a los temas sociales.